



EL PROCURADOR GENERAL DR. DIEGO GARCÍA CARRIÓN

(ABRIL DE 2008 – ...)

HOJA DE VIDA

Lugar y fecha de nacimiento

Guayaquil, 25 de enero de 1963.

Instrucción

Es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, titulado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Se graduó de abogado en 1988 y obtuvo su doctorado en Jurisprudencia en la misma universidad, en el año 1995, con la Tesis “La Mujer en la Legislación Ecuatoriana”.

Funciones y cargos

Se inició laboralmente como funcionario del Departamento de Cartera y Legal del Banco de Descuento (1981–1984). Desde 1984 ha sido parte del Estudio Jurídico García Feraud & Hijos, dedicado a la asesoría legal externa en la atención de asuntos de naturaleza civil, comercial, bancaria, societaria, administrativa y laboral. El doctor García ha sido también asesor de varias instituciones bancarias y empresas comerciales e industriales.

Inició su trayectoria en la función pública en 1992, como jefe del departamento legal de Autoridad Portuaria de Guayaquil, cargo que desempeñó hasta 1994. Entre 2003 y 2006, se desempeñó como Conjuez Permanente del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, en Guayaquil. Durante los periodos los años 2000–2003 y 2006–2007, fue Delegado del Presidente de la República en el Consejo Nacional de Valores.

En 2006 asumió el cargo de Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, lo que le aportó una valiosa experiencia en Derecho Público y Constitucional. En ese mismo período fue, además, Representante del Presidente de la República en el directorio de Petroecuador y Director de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Condecoraciones y distinciones

Por su exitosa gestión como Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, fue condecorado con la “Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito”, conferida por el Presidente de la República, Dr. Alfredo Palacio González, en enero de 2007.

SUS ACCIONES COMO PROCURADOR

El 22 de abril de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente designó como nuevo Procurador General del Estado al doctor Diego García Carrión, un joven y prestigioso jurista guayaquileño, tras aceptar la renuncia del doctor Xavier Garaicoa a esta función.

Caso OXY II

La rapidez de estos acontecimientos impuso al nuevo funcionario la necesidad de ponerse al día en los procesos judiciales que se hallaban en marcha, cuestión que supo enfrentar con alta solvencia profesional. Así, consciente de que el proceso arbitral iniciado por la petrolera Occidental era un asunto prioritario y que estaba por vencer el plazo de contestación a la demanda, solicitó al Tribunal Arbitral del CIADI un plazo adicional para estudiar y presentar dicho memorial.

En mayo de 2008, ese Tribunal Arbitral resolvió favorablemente la petición y concedió un mes de prórroga al Ecuador para que presentase su memorial. En mayo, el Procurador General, como representante del Estado Ecuatoriano, asistió a las audiencias que se realizaron en París, donde sostuvo que el CIADI no era competente para conocer la discusión sobre la caducidad de ese contrato, ya que éste excluyó el arbitraje y también lo excluía nuestro Derecho Constitucional, que prima sobre los convenios internacionales.

Suscripciones de convenios Interinstitucionales

Interesado en fomentar el uso de la mediación para la solución de controversias, entre las instituciones públicas y personas naturales o jurídicas del sector privado, el doctor Diego García suscribió convenios de cooperación con varias entidades públicas. Ellas fueron los Ministerios de Estado, el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE), la ESPE, la Corporación Financiera Nacional y el Banco Nacional de Fomento.

Acciones contra el lavado de activos

Como responsable principal de la lucha contra el narcotráfico, el Procurador General participó en el Primer Encuentro Regional de Tipologías de Lavado de Activos, realizado en Quito en mayo de 2008, al que asistieron varios países latinoamericanos.

■ *En un acto público de la Procuraduría, figuran, de izq. a der.: Dr. Diego Zapater, Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera; Dr. Rafael Parreño, Sub-Procurador General; Dr. Diego García Carrión, Procurador General del Estado y Dr. Domingo Paredes, Director Ejecutivo del CONSEP. (Foto: Carlos Villacrés).*



Afirmó en el evento que “el éxito del Ecuador en este ámbito se debe al fortalecimiento del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), institución que ha contribuido al desarrollo eficaz y oportuno de un sistema de prevención y detección de lavado de activos.” Destacó que la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) estaba en capacidad “de afrontar los retos que la dinámica financiera y globalización económica le imponen como desafío institucional” y que era necesario alcanzar una estabilidad económica y jurídica de la región, libre de los efectos perversos de una economía paralela.

Presencia en la Asamblea Constituyente

El 29 de mayo del 2008, en Ciudad Alfaro, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, el Procurador General se reunió con miembros de la Mesa 3, de Estructura e Instituciones del Estado y la Mesa 10, de Legislación y Fiscalización, para exponer su visión sobre el rol que debía cumplir la Procuraduría en la nueva estructura del Estado. Enfatizó en la necesidad de

■ *El Procurador Diego García Carrión y sus colaboradores visitan a la Asamblea Constituyente, en Ciudad Alfaro.*



que la Procuraduría tenga independencia y autonomía. Habló de las funciones de la institución y particularmente del control concurrente en los procesos de contratación pública, a fin de que se llevaran adecuadamente, sin convertirse en obstáculos para la ejecución de obras de interés nacional. La Asamblea Nacional valoró cabalmente la intervención y opiniones del Procurador y, en reunión plenaria del 17 de julio de 2008, aprobó los textos constitucionales sobre la Procuraduría General del Estado, que ratifican la autonomía administrativa, presupuestaria y financiera de esta institución.

Informe sobre bienes incautados por el CONSEP

El Procurador General, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), recibió el 17 de junio del 2008, de parte de la Secretaría Ejecutiva, el informe de resultados de los bienes incautados producto del narcotráfico. El informe detallaba que, desde 1992, en el país se habían incautado 549 inmuebles, 992.656 bienes muebles, 1752 vehículos y 7 aeronaves. El Procurador García señaló la importancia de la actualización y publicación de ese inventario de bienes administrados por el CONSEP, que precisa su número, condición y tenedor actual, cumpliendo así, en forma transparente, un encargo social de gran importancia.

Tribunal Fiscal ordena archivo de juicio original en caso Nuques

Con auto del 10 de julio de 2008, El Tribunal Distrital de lo Fiscal de Guayaquil ordenó el archivo del juicio de nulidad de procedimiento coactivo por obligaciones tributarias en contra de la familia Nuques, que dio lugar a una injustificada reclamación por 23 millones de dólares. El Tribunal determinó que el SRI cumplió con la sentencia de nulidad del procedimiento coactivo y que nunca existió la obligación de indemnizar por daños y perjuicios a los herederos Nuques, quienes, dentro del proceso, desistieron de la acción.

Encuesta Nacional sobre consumo de drogas

El Procurador General del Estado presidió, el 17 de julio de 2008, la presentación de la Tercera Encuesta Nacional a Hogares sobre Consumo de Drogas 2007. Manifestó que este estudio “permite tener un conocimiento real de la magnitud y patrones del consumo de drogas entre los países de la región y ver la incidencia del consumo de estas sustancias en nuestra sociedad”.

Gestiones en Washington para resolver conflictos con petroleras por ley 42

En julio de 2008, el Procurador General del Estado estuvo de visita en Washington para tratar con los abogados que defienden al país en los casos de arbitraje planteados ante el CIADI por algunas petroleras. Sus gestiones mostraron el deseo de Ecuador por resolver cuanto antes esos contenciosos.



■ Anuncio de acuerdo entre el Estado y City Oriente Limited. El Procurador Diego García Carrión aparece entre el Presidente de Petroecuador, Calm. Luis Jaramillo y el Ministro de Minas y Petróleos, Dr. Galo Chiriboga. (Foto: Carlos Villacrés).

Aparte de los arbitrajes, la Procuraduría General planificó una estrategia de negociación con las empresas, para evitar que se prolongasen los procesos judiciales. Fruto de estas negociaciones, el 31 de julio se firmó un acuerdo entre la empresa City Oriente y el Estado, por el que finalizó el contrato de participación de ésta en el Bloque 27 y un protocolo adicional de terminación del conflicto que estaba ventilándose en el CIADI. Así, el Ecuador se liberó de un eventual pago de 400 millones de dólares y logró el pleno reconocimiento de la soberanía ecuatoriana.

Firma de acuerdo Zambrano - Rada

El Procurador General, cumpliendo con la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, firmó el lunes 28 de julio del 2008 un acuerdo de solución amistosa con los padres de los estudiantes Marco Javier Zambrano y José Javier Rada, del Colegio “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, que el 31 de diciembre de 1991 fueron privados de su vida, sin que a la fecha se hayan esclarecido las circunstancias del hecho ni se haya sancionado a los responsables. El acuerdo incluyó la reparación económica y no económica de los daños, en términos satisfactorios para ambas partes.

Procuraduría celebra 80 años

La Procuraduría celebró sus 80 años de vida institucional con una sesión solemne que se realizó en el Convento de la Merced, con la presencia del señor Presidente Constitucional de la República, Ec. Rafael Correa Delgado, y otras altas autoridades del Estado, así como del Procurador del Tesoro de la Nación de la República Argentina, Dr. Osvaldo Guglielmino.

- *El Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, preside el acto conmemorativo de los 80 años de la Procuraduría, junto con el Procurador General Dr. Diego García y otras altas autoridades. (Foto: Fernando Sandoval, diario El Telégrafo).*



En dicho acto, el Procurador General dijo: “La Procuraduría General del Estado tiene un reto frente al futuro del Ecuador. Estamos preparados para enfrentar el reto con depurada profesionalidad, aprovechando la experiencia que nos da el pasado, pero con mente abierta hacia el futuro”.

Interés prioritario del Dr. García ha sido la capacitación del personal institucional, particularmente en las áreas de contratación pública y de formación y entrenamiento de mediadores.

A MODO DE EPÍLOGO

Hija de la memorable “Revolución Juliana” y nacida bajo la figura personal del Procurador de la Nación, la Procuraduría General del Estado ha evolucionado junto con el país y ha crecido al punto de abarcar una serie de complejas responsabilidades.

Hoy, como ayer, la institución debe ejercer el Patrocinio del Estado, representando judicialmente a éste ante juzgados y tribunales, tanto nacionales como internacionales. También debe revisar y aprobar el texto de los contratos de interés público, esto es, de aquellos en que intervenga el Estado y comprometan el uso de fondos fiscales, y asesorar jurídicamente a los altos poderes de la Nación. Pero también han pasado a ser tareas suyas, o de su titular, el dirigir la prevención y control del tráfico de drogas y el promover la plena vigencia de la juridicidad en el Ecuador, informando a los ciudadanos sobre sus derechos individuales y colectivos, así como promoviendo el conocimiento de la legislación vigente en el país.

Los sucesivos cambios producidos en su organización interna han ampliado o reducido su ámbito de acción y, sobre todo, han marcado su relación con el Gobierno central, otorgándole cada vez mayor autonomía de gestión. En general, la legislación ha buscado que la Procuraduría deje de ser una entidad dependiente del Poder Ejecutivo o vinculada a éste, para que sea, cada vez más, una institución al servicio de la Nación, esto es, tanto del Estado y de sus órganos de poder, como de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Pese a ello, se produjo una involución de su nombre, que pasó de “Procuraduría General de la Nación” a “Procuraduría General del Estado”.

Una mirada general sobre los pasados ochenta años muestra una imagen esencialmente positiva de esta institución, cuya presencia ha marcado en gran medida la modernización y democratización del Estado ecuatoriano. Han sido ejemplares los esfuerzos de la mayoría de Procuradores Generales por imponer el respeto a las normas jurídicas, frecuentemente amenazadas por los impulsos de cambio o los arrebatos de algunos gobernantes, que veían en las leyes un obstáculo a su acción administrativa o un freno a sus particulares concepciones políticas. En ocasiones, esa resistencia a la juridicidad estuvo inspirada no en el fervor ejecutivo o el ansia creadora de un funcionario, sino en su deseo de pasarse por encima de la ley para favorecer protervos intereses propios o ajenos. Así, no resulta casual que los mayores choques en este campo se hayan dado alrededor de la aplicación de las leyes de licitaciones o de contratación pública, vistas con ojeriza por los funcionarios venales o irresponsables.

Ha sido igualmente encomiable la acción de muchos Procuradores en defensa de los derechos ciudadanos, afectados en ocasiones por la acción de empleados públicos. Alertar sobre esos abusos administrativos o violaciones de la ley, restituir los derechos conculcados e indemnizar a los afectados, han sido nobles tareas que la institución ha ejecutado en defensa de la paz y la convivencia social.

Empero, una evaluación objetiva nos muestra también la presencia de unos cuantos Procuradores que no cumplieron con su servicio a la Nación, porque prefirieron ponerse al servicio del poder, y que no defendieron los intereses nacionales, para beneficiar a oscuros intereses privados. Y en esa misma línea deben ser ubicados otros funcionarios que, en busca de congraciarse con el gobernante del momento o con los grandes poderes internacionales, favorecieron y consagraron legalmente el “endeudamiento agresivo” del país, emitiendo dictámenes favorables para empréstitos leoninos, que acrecentaron la coyunda financiera que pesaba sobre la nación. En fin, no han faltado quienes han abusado de su posición para manejar irresponsablemente los fondos públicos puestos a su cuidado, especialmente en el pago de indemnizaciones a perjudicados por el Estado y en el otorgamiento de beneficios sociales a los empleados de la entidad.

Por suerte, esas actuaciones equívocas, más bien limitadas en número, son superadas largamente por las acciones positivas de la enorme mayoría de Procuradores Generales, notables juristas que pusieron sus conocimientos y experiencia al servicio de la Nación y que laboraron lealmente en la defensa de los intereses públicos. Con su presencia sabia, con sus ilustrados dictámenes y opiniones, y sobre todo con su singular patriotismo, ellos construyeron la brillante trayectoria de servicio al país transitada por la Procuraduría General del Estado durante sus ocho décadas de existencia.